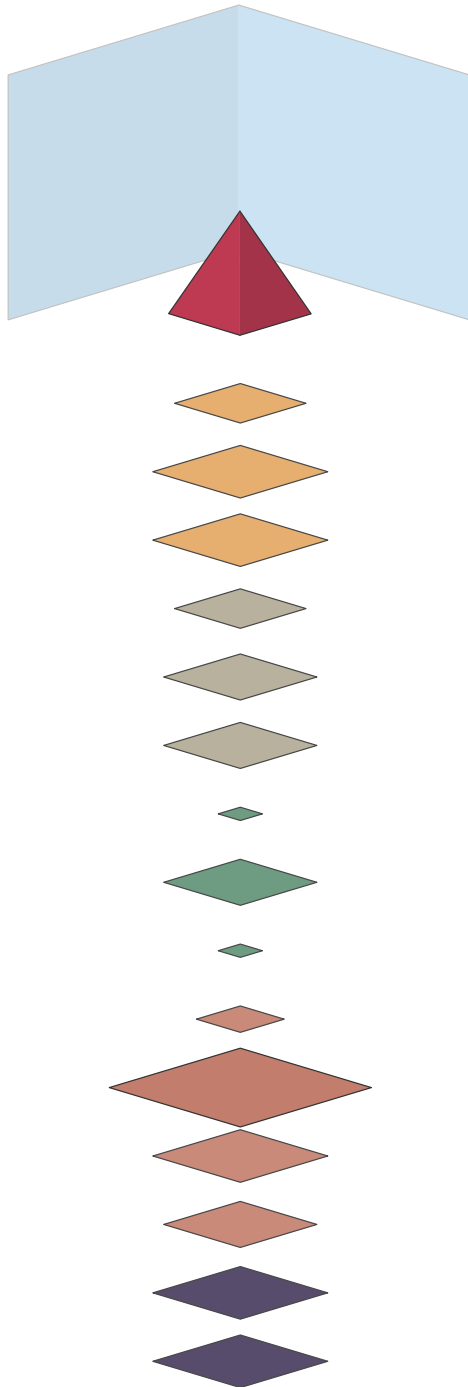


URUGUAY



3,22

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

172.º de 193 países

30.º de 35 países americanos

12.º de 12 países de América del Sur



MERCADOS CRIMINALES

3,33

TRATA DE PERSONAS **3,00**

TRÁFICO DE PERSONAS **4,00**

EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN **4,00**

TRÁFICO DE ARMAS **3,00**

COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS **3,50**

COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO
SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES **3,50**

DELITOS CONTRA LA FLORA **1,00**

DELITOS CONTRA LA FAUNA **3,50**

DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES **1,00**

COMERCIO DE HEROÍNA **2,00**

COMERCIO DE COCAÍNA **6,00**

COMERCIO DE CANNABIS **4,00**

COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS **3,50**

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA **4,00**

DELITOS FINANCIEROS **4,00**



ACTORES CRIMINALES

3,10

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO **2,50**

REDES CRIMINALES **4,50**

ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO **3,00**

ACTORES EXTRANJEROS **2,50**

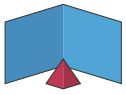
ACTORES DEL SECTOR PRIVADO **3,00**



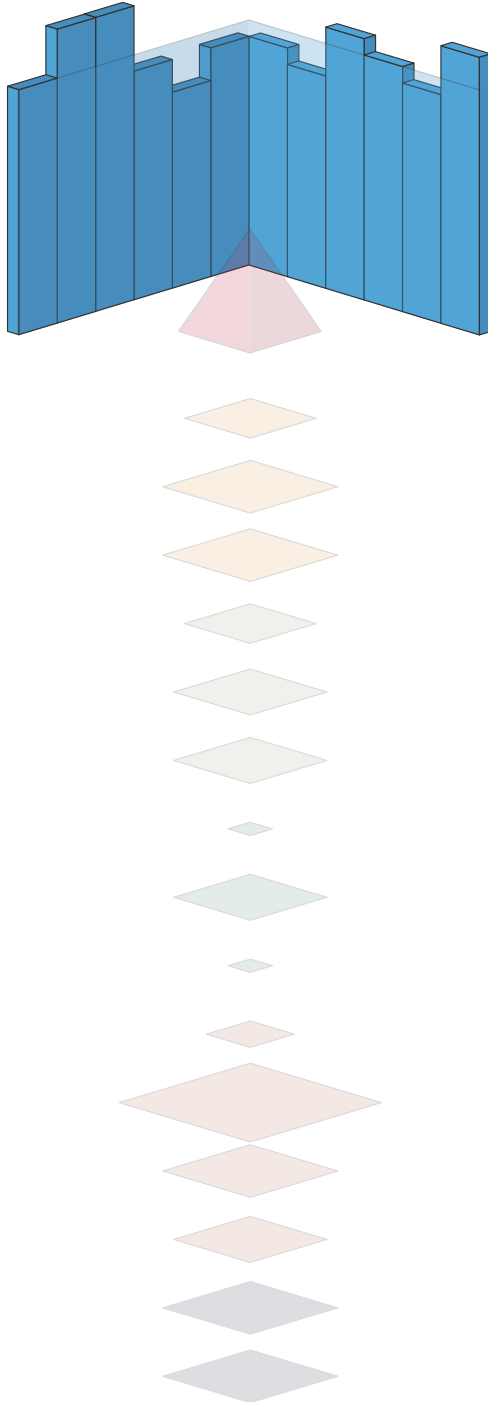
7,50

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA





URUGUAY



7,50

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

13.º de 193 países

1.º de 35 países americanos

1.º de 12 países de América del Sur

LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	7,50
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	9,00
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	9,00
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	7,00
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	6,00
CUERPOS DE SEGURIDAD	7,00
INTEGRIDAD TERRITORIAL	7,00
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	6,50
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	8,00
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	7,50
PREVENCIÓN	7,00
ACTORES NO ESTATALES	8,50



3,22

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD



MERCADOS CRIMINALES 3,33



ACTORES CRIMINALES 3,10



CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

Uruguay se considera un pequeño país de origen, tránsito y destino para la trata de seres humanos. La trata de mujeres y de niñas se realiza principalmente con fines de explotación sexual en el país y las víctimas proceden sobre todo de Argentina, Brasil, República Dominicana, Paraguay y otros países sudamericanos. Aunque las casas de prostitución son legales en Uruguay, al menos una cuarta parte de las mujeres que las frecuentan son víctimas de la trata de personas. También se sabe que las familias empobrecidas de Uruguay prostituyen a sus hijos, mientras que los trabajadores extranjeros de los países vecinos son sometidos a trabajos forzados en diversas industrias. Uruguay es también un país de origen de mujeres que viajan a Europa, principalmente a España e Italia, para realizar trabajos domésticos y sexuales y que a menudo son sometidas a explotación laboral, debido a su falta de estatus migratorio.

Uruguay es también un país de tránsito para el tráfico de personas. Algunos ciudadanos cubanos son reclutados en La Habana y transportados a Uruguay, donde solicitan el estatuto de refugiado, mientras que otros pagan miles de dólares para continuar su viaje hacia el norte, a Estados Unidos. Las redes delictivas utilizan documentación fraudulenta para facilitar el tránsito de los contrabandistas y estas redes tienen contactos en distintos países de la región, como Ecuador y Perú. Además, ha aumentado el número de venezolanos que han llegado a Uruguay y han solicitado asilo al llegar.

Hay pruebas de que hay extorsiones en el país. Los grupos de crimen organizado han desarrollado estrategias sofisticadas, que incluyen el envío de notas de voz, haciéndose pasar por policías y fiscales, e incluso el envío de cartas con el sello de la Policía paraguaya para intimidar a las víctimas. Sin embargo, estos delitos no tienen un impacto notable en la sociedad uruguaya. No hay evidencia de cobros ilegales por protección.

TRÁFICO

A pesar de la pandemia de la COVID-19, sigue habiendo tráfico de armas dentro y fuera de Uruguay. Los casos incluyen el tráfico de armas de Argentina a Uruguay y la venta en línea de estas armas por parte de ciudadanos uruguayos, así como el tráfico de armas de Uruguay a Brasil, en el que están implicados agentes de la Policía local. La incoherencia en las normativas sobre armas entre los distintos países de la región se identifica como un factor

que contribuye al comercio ilegal y un ejemplo destacado es la demanda brasileña de pistolas que son legales en Uruguay, pero ilegales en Brasil. La creciente frecuencia de asesinatos de agentes de Policía uruguayos, que son asaltados o asesinados para conseguir sus armas de fuego para el mercado negro, es una grave consecuencia del mercado ilegal.

Los productos falsificados también están presentes en el mercado uruguayo. Entre los artículos falsificados que se venden figuran réplicas de marcas famosas, como aparatos electrónicos, ropa y equipos de streaming. En los últimos años ha aumentado la venta en línea de productos falsificados, algunos de los cuales proceden de Paraguay y de China. Si bien Uruguay tiene un mercado de productos falsificados, no es un centro regional de artículos falsificados y el tamaño de este mercado es mucho menor, en comparación con los de sus vecinos: Argentina y Brasil. Además, no hay pruebas de que el mercado esté conectado con actores del crimen organizado ni asociado con actos de violencia. El contrabando fronterizo de bienes generales y de consumo se ha arraigado en las economías y las culturas locales de muchas regiones de Uruguay. Este fenómeno ha persistido a lo largo del tiempo y los Gobiernos a menudo han hecho la vista gorda. Hay una gran variación en el tipo de productos que se venden, desde alimentos hasta bebidas.

MEDIOAMBIENTE

Se considera que Uruguay es uno de los países con menor biodiversidad del continente. Por ello, se considera que el comercio ilícito de flora es bajo. En cuanto a los delitos contra la fauna, el país ha visto aumentar el comercio ilegal de pescado, sobre todo el procedente de Argentina. La presencia de buques chinos en el puerto de Montevideo ha alarmado a los ecologistas, debido al problema de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada por parte de flotas extranjeras. El puerto de Montevideo es un destino privilegiado para las flotas pesqueras extranjeras que realizan actividades de pesca ilegal. Durante la pandemia de la COVID-19, los delincuentes también ampliaron el uso del comercio electrónico para vender animales salvajes. Aunque no hay pruebas de la implicación de grupos delictivos internacionales, como suele ocurrir en otras partes del continente, cada mes se incautan a los traficantes decenas de especies animales, de las cuales las aves son las más afectadas. Sin embargo, en comparación con los países vecinos, el tráfico de especies silvestres en Uruguay parece reducido.

Uruguay tiene un control estatal efectivo sobre los delitos relacionados con los recursos no renovables y no hay pruebas de la existencia de este mercado delictivo en el país.

DROGAS

Uruguay tiene un consumo limitado de heroína y de opiáceos. Sin embargo, existe un mercado de heroína estrechamente vinculado al tráfico de cocaína y controlado principalmente por organizaciones mexicanas e italianas. Aunque Uruguay es un actor pequeño en el mercado de la cocaína en comparación con sus vecinos, sigue siendo un país de tránsito para las drogas destinadas a Europa. Al parecer, en el país operan organizaciones delictivas de Colombia, México, Brasil y Rusia. Al mismo tiempo, existe una demanda local de cocaína, sobre todo de «pasta base», un derivado similar al crack.

Uruguay permite a los mayores de 18 años obtener legalmente cannabis, comprándolo en farmacias autorizadas, haciéndose socios de un club o cultivándolo en el propio país. Sin embargo, la implementación de regulaciones en torno al comercio legal de marihuana ha sido lenta y ha dejado espacio para que los actores ilegales satisfagan la demanda de la droga. Aunque el mercado ilícito se está reduciendo, la mayoría de los consumidores de marihuana de Uruguay siguen recurriendo al mercado gris para obtenerla. Las autoridades están tomando medidas para que el mercado legal resulte más atractivo, como el lanzamiento de una nueva variedad de cannabis comercial producido por el Estado, con mayor contenido de THC. El cannabis producido legalmente ya se trafica a los países vecinos, pero es poco probable que se convierta en un problema importante, ya que el mercado uruguayo es pequeño.

Uruguay es un país de destino para las drogas sintéticas, con una demanda local que genera beneficios para las organizaciones delictivas. El consumo de drogas sintéticas va en aumento y la más popular es el éxtasis, que es consumido principalmente por los sectores de ingresos medios y altos de la sociedad. Las autoridades han informado de que los grupos delictivos están alterando las drogas sintéticas con sustancias que aumentan el riesgo de intoxicación, especialmente en adultos jóvenes, que son los principales consumidores de estas drogas en las fiestas techno. Si bien Uruguay no es un país de tránsito importante para las drogas sintéticas, se han descubierto laboratorios, principalmente para satisfacer la demanda local.

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA

Los ataques de ransomware son cada vez más frecuentes en el país y los objetivos son las instituciones estatales, lo que provoca el acceso no autorizado a bases de datos que contienen datos biométricos de las personas, como fotografías, huellas dactilares, nombres y números de documentos de identidad. Sin embargo, el mercado de los delitos ciberdependientes no parece tener un valor sustancial ni estar relacionado con grupos de delincuencia organizada.

DELITOS FINANCIEROS

Los tipos de delitos financieros más frecuentes en Uruguay incluyen el fraude de identidad, los esquemas Ponzi y el phishing. En los últimos años ha habido un aumento de las estafas de phishing. Aunque el fraude financiero existe en el país, no se considera un delito común. La evasión fiscal, la malversación y el uso indebido de fondos también se producen, pero no hay pruebas de que los grupos de delincuencia organizada cometan estos delitos para obtener beneficios económicos o ventajas profesionales.

ACTORES CRIMINALES

Los grupos de tipo mafioso en Uruguay son pequeños y se centran principalmente en el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero. Estos grupos son conocidos por sus vínculos con el sistema penitenciario y su uso de la violencia. Algunos de estos grupos han ganado visibilidad en Uruguay, después de que sus miembros amenazaran a fiscales y policías que investigaban sus actividades. Por el contrario, las redes delictivas más pequeñas de Uruguay se consideran clanes familiares que operan en barrios pobres de la periferia de las principales ciudades. Estos grupos se dedican a actividades delictivas como el tráfico de drogas, el robo y el abigeato. Aunque la extorsión y los secuestros siguen siendo poco frecuentes, algunos grupos pequeños se han aventurado en estas áreas delictivas en los últimos años. Se sugiere que el aumento de estas actividades delictivas se debe a los enfrentamientos entre grupos que se disputan el control de los territorios y se dice que algunos líderes de estos grupos llevan a cabo actividades delictivas desde la cárcel.

Organizaciones delictivas extranjeras de Colombia, México, Brasil, Argentina y Perú también operan en Uruguay y se dedican a actividades relacionadas con el contrabando, el narcotráfico y el robo de ganado. Los grupos delictivos brasileños son especialmente activos en las ciudades fronterizas y han participado en violentas disputas por el control del tráfico de drogas en la región. La mafia italiana tiene presencia en el país y las redes de narcotráfico vinculadas a Paraguay han estado presentes históricamente. Aunque existe corrupción a nivel de las fuerzas policiales y las aduanas, no hay pruebas de que actores estatales controlen los mercados delictivos o cooperen ampliamente con las organizaciones criminales. La Policía se considera una de las instituciones más fiables del país y el sistema judicial uruguayo es uno de los más sólidos de la región. Los autores de actividades delictivas suelen ser castigados. Sin embargo, hay agentes del sector privado implicados en actividades de blanqueo de dinero en el país. En los últimos años, bufetes de abogados, empresas y algunas cuentas bancarias se han visto implicados en casos de blanqueo de capitales. No obstante, están disminuyendo los informes sobre operaciones sospechosas de blanqueo de capitales.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

Uruguay es una república constitucional con un Estado fuerte, partidos políticos establecidos y un alto grado de institucionalización. Goza de un sólido Estado de derecho y ocupa el primer lugar de la región en confianza en los partidos políticos y el Parlamento. Aunque no hay pruebas de que el crimen organizado se haya infiltrado en el Gobierno, los recientes incidentes en los que se han visto implicados narcotraficantes y fuerzas de seguridad han suscitado críticas. Aunque el país ha avanzado en la lucha contra la corrupción, sigue faltando una normativa adecuada sobre la financiación de los partidos políticos. Uruguay cuenta con una Ley de Acceso a la Información Pública, que promueve la transparencia y garantiza el derecho de acceso a la información gubernamental. Además, Uruguay cuenta con varias instituciones dedicadas a garantizar la rendición de cuentas y la transparencia.

Uruguay es un signatario comprometido de múltiples convenciones de la ONU, incluidas las relativas a la corrupción, el narcotráfico y la preservación de especies en peligro de extinción. La legalización del cannabis en Uruguay va en contra de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, pero el país sigue cooperando estrechamente con los organismos internacionales encargados de hacer cumplir la ley y tiene acuerdos de extradición con varias naciones. La Oficina Central Nacional de Montevideo es un actor fundamental en los esfuerzos internacionales para combatir el tráfico y mantener la seguridad regional. Además, Uruguay ha reforzado su colaboración con la Fuerza Aérea Brasileña para controlar mejor los vuelos irregulares y disuadir así a la delincuencia organizada. El marco jurídico uruguayo contra el crimen organizado es exhaustivo y abarca todas las formas de actividad ilícita, incluidos el tráfico de seres humanos y el de armas. Sin embargo, no tiene disposiciones específicas que aborden los delitos relacionados con los vehículos, como el tráfico de vehículos de motor o de sus piezas, que es un problema considerable en el país.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

Uruguay cuenta con órganos especializados dentro de su sistema judicial para supervisar los casos de crimen organizado y existe una política actual para incrementar el uso de videoconferencias en las audiencias para evitar problemas logísticos. Aunque varias fiscalías están especializadas en el crimen organizado y parecen eficaces, carecen de recursos suficientes. El sistema penitenciario del país se enfrenta a un hacinamiento crónico y a unas condiciones de vida deficientes, con una elevada tasa de homicidios, denuncias de tortura y malnutrición y una proporción significativa de reclusos en prisión preventiva. Las organizaciones internacionales han expresado su preocupación por la

tortura, la impunidad y los altos niveles de reincidencia en el sistema penitenciario uruguayo. Aunque los grupos de delincuencia organizada ejercen poco control en las prisiones del país, algunas operaciones delictivas relacionadas con el narcotráfico tienen lugar desde ellas.

El Ministerio del Interior es responsable de la seguridad pública y cuenta con instituciones, como la Guardia Republicana, una fuerza policial militarizada, dedicadas a luchar contra el crimen organizado. Sin embargo, un reciente escándalo de pasaportes, gracias al cual pudo escapar del país un destacado capo de la mafia, ha puesto de manifiesto la falta de coordinación entre las fuerzas del orden y los funcionarios diplomáticos. El Ministerio del Interior ha creado una unidad especializada en ciberdelincuencia y una plataforma virtual para recoger quejas o denuncias de delitos, recibidas por otras autoridades policiales.

Las porosas fronteras de Uruguay con Argentina y Brasil convierten al país en un punto de tránsito para la cocaína con destino a Europa, que se introduce de contrabando a través de rutas terrestres y fluviales. El país ha experimentado un aumento del tráfico de drogas, posiblemente debido a la militarización de Brasil y a su enfoque de tolerancia cero, que puede haber empujado parte del tráfico hacia Uruguay. Sin embargo, hay pocos indicios de que las organizaciones delictivas controlen alguna parte de la frontera, aunque las organizaciones delictivas brasileñas han aumentado recientemente su presencia en estas zonas. La integridad territorial de Uruguay también se ve comprometida por los continuos problemas estructurales de la Fuerza Aérea y la Armada, que tienen aviones inoperativos y carecen de radares y de buques. A pesar de estos retos, Uruguay es líder en ciberseguridad en América Latina y el Caribe.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Uruguay cuenta con un marco jurídico y un mecanismo exhaustivos en materia de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo. Esta normativa obliga a los bancos a identificar a los beneficiarios finales de los fondos y permite rastrear las transacciones financieras. Aunque se considera que Uruguay es uno de los países más resistentes de América del Sur en materia de blanqueo de capitales, aún debe redoblar sus esfuerzos para regular los juegos de azar en línea.

El entorno regulador de la economía en Uruguay se mantiene estable, sin grandes cambios. El Estado es capaz de regular las empresas legítimas y de impedir que el crimen organizado se apodere de cualquier sector de la economía. La tierra y los derechos de propiedad están protegidos y el país ofrece oportunidades para la expansión empresarial. Sin embargo, los elevados impuestos siguen siendo un reto para las empresas que operan en Uruguay.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

El Gobierno uruguayo ha proporcionado apoyo y protección a las víctimas de la trata a través del Ministerio de Desarrollo Social y sus organismos afiliados. Estos organismos han desempeñado un papel crucial a la hora de proporcionar atención de respuesta inmediata, asesoramiento, formación profesional y alojamiento a estas víctimas. Sin embargo, se necesitan servicios especializados a largo plazo para ellas, ya que los servicios financiados por el Gobierno se centran principalmente en proporcionarles asistencia psicosocial y jurídica. Las víctimas son alojadas temporalmente en hoteles o derivadas a refugios destinados a otras poblaciones, como las víctimas de la violencia doméstica, ya que no existen refugios específicos para las víctimas de la trata. Además, los servicios de tratamiento de la drogodependencia son escasos en el país y suelen estar gestionados por la sociedad civil y los servicios destinados a prevenir las consecuencias adversas para la salud entre las personas que consumen drogas son limitados.

Los esfuerzos de Uruguay para prevenir la trata de personas incluyen actividades de sensibilización, cursos de formación para diplomáticos y líneas telefónicas directas para denunciar delitos. Sin embargo, el Gobierno no ha implementado un nuevo Plan de Acción Nacional ni ha asignado fondos para dicho plan. La Policía Nacional uruguaya solo ha realizado esfuerzos esporádicos para mejorar la relación entre la Policía y la comunidad, sin que se hayan producido cambios culturales significativos en la institución.

La sociedad civil uruguaya es muy activa en el debate sobre la aplicación de la ley, como se observa en las respuestas a los cambios propuestos en la Constitución. El país cuenta con un entorno favorable para los medios de comunicación, con un alto nivel de libertad de prensa y libertades civiles. Aunque se han dado casos aislados de amenazas, intimidación, presiones políticas a periodistas, acoso judicial e intentos de asesinato, son relativamente infrecuentes.

Este resumen ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, los hallazgos y las conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.